

¿Quién pagará la crisis?

Ya se olvidó el BTV, el supuesto sobreprecio en la compra del edificio de la Fundación del Niño, el "casual" incendio en los archivos de las oficinas de COPAN 83, ... y otros episodios de la anunciada guerra contra el cáncer de la corrupción, principal peligro de la democracia. A segundo plano han pasado los recuerdos del 23 de enero del 58 (más importante parece ahora recordar la devaluación del 61), los balances de los 25 años del sistema político vigente, el optimismo concomitante a las campañas electorales, ... y hasta el bicentenario del nacimiento del Libertador ha perdido brillo. Ahora se predica la unidad nacional para enfrentar la crisis. Llegó la reducción significativa de los ingresos petroleros, el control de cambio, la devaluación del fuerte bolívar, el agobio para responder a los compromisos internacionales inmediatos, el corre-corre de los más altos personajes públicos...

Nos encontramos ante un violento cambio de prioridades que luce hasta sospechoso. La situación que estamos viviendo hoy no surgió de la nada, no es producto de un repentino accidente, ni fruto de una inevitable catástrofe natural. Había sido anunciada por serios analistas de todos los bandos, gritada por diversos sectores, proclamada por quienes empezaron a sentir sus efectos directos (desempleo, alzas del costo de la vida, deterioro de los servicios...) y hasta deseada (¿provocada?) por quienes calcularon que podían sacar algún provecho.

De repente toda la atención nacional es obligada a focalizarse en quienes "carecen de dólares" y vuelven a posponerse los problemas cotidianos de la gente común, porque estamos en emergencia. Se quiere olvidar que "debemos resolver los problemas de quienes nunca han tenido bolívares", como expresó el diputado Luis Matos Azócar al comunicar al Presidente Herrera la instalación de las Cámaras Legislativas (El Nacional 3-3-83). Entre los ciudadanos comunes y corrientes se intuye que la crisis no se reduce a la cotización del dólar. Se sospecha que algo se está cocinando entre los poderosos. Y surge la angustiante pregunta: ¿a quién le van a hacer pagar esta crisis?

LOS BENEFICIARIOS DE LA CRISIS

Dicen los que se dedican a las actividades policiales que suele ser un productivo recurso al iniciar una investigación sin muchas pistas preguntarse a quién beneficia la acción realizada. En la situación en la que vive el país podemos proceder de la misma manera. Parece obvio que no todo el mundo es afectado por igual por las medidas tomadas ni por la situación en general. Hubo avisados venezolanos que empezaron desde hace bastantes meses a "curarse en salud" (olvidándose de la salud de la patria), es decir, a convertir sus varios millones de bolívares en dólares, previendo cualquier eventualidad. Las "previsiones" de estos venezolanos llegaron a tales magnitudes que las reservas en divisas del país sufrieron una merma muy peligrosa, arrastrando hasta las centralizadas reservas de PDVSA. La desconfianza en la situación de la economía venezolana se fue irradiando hasta los sectores que no tienen muchos bolívares que convertir en divisas.

Sin embargo, tanto dinero sacado preventivamente no tiene dolientes que den la cara. Hoy todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. ¡Cómo ha podido salir tanto dinero! ¡Quién lo dejó salir! Pero nadie asume la responsabilidad. No se sabe quién sacó los reales. El estupor llega al máximo grado cuando, después de tomadas las medidas cambiarias, encontramos en la prensa que el Sr. Gustavo Cisneros, presidente de uno de los más grandes grupos económicos del país, fue a Miraflores a felicitar al Presidente Herrera por las medidas tomadas para cortar el flujo de divisas al exterior. Conmueve, realmente, el gesto de quien —dicen las malas lenguas— ya no tiene más nada que sacar y probablemente mucho que meter. Otros habrán mostrado su beneplácito —por las medidas— de otro modo. Pero el hecho es el mismo: esta crisis tiene beneficiarios. Y nos atrevemos a sospechar que son los mismos que la provocaron directa o indirectamente (apoyaron la política neo-liberal de los años anteriores, iniciaron, con cualquier motivo, la salida de capitales al exterior, desconfiaron y crearon desconfianza interna) quienes van a ser sus principales beneficiarios.

LA ACTITUD DEL GOBIERNO

Desconcertante para un buen grupo de venezolanos ha sido la actitud del Ejecutivo nacional. Aparentemente sordo ante los análisis hechos desde tiempo atrás hasta en su propio interior. Acusando de pesimismo enfermizo a quienes se atrevían a pedir cambio de políticas económicas. Sorpresivamente agarrado en descampado por las variaciones del mercado petrolero desde comienzos de 1982. Auto-engañado en el monto de la deuda pública externa. Recurriendo a todas las reservas (oro, PDVSA...). Lento a los cambios necesarios en su equipo económico. Casado con el axioma liberal de "dejar hacer, dejar pasar". Incapaz de hacer gestos que transmitieran confianza al país.

Quando ipor fin! decide tomar cartas en el asunto, la imagen del gobierno sigue siendo desconcertante. Una sensación de improvisación en todos los terrenos. Una mezcla de sordera a los clamores y presiones de los diferentes grupos con un empeño en tomar medidas que no "perjudiquen" a (las ganancias de) nadie. Angustiosas reuniones de gabinete durante las noches y madrugadas, y larguísimos actos protocolares (recibimientos, aniversarios, visitas al exterior) durante el día manteniendo al país en ascuas.

Uno de los rasgos más desconcertante de toda la situación es la ventilación de las diferencias entre los funcionarios de más alto rango en público. La existencia de personas que piensen y sostengan posiciones diferentes enriquece a cualquier equipo de gobierno y puede contribuir a encontrar soluciones mejores. Sin embargo, cuando no hay capacidad de convertir las diferencias en amplitud de miras sobre el problema para tomar serenamente la decisión más pertinente, sino que se convierte en una especie de pelea boxística entre el presidente del BCV y los Ministros de la economía ante la mirada estupefacta de la ciudadanía y la "paciencia" del Presidente de la República, se llega a temer por el país que tiene un gobierno que no es gobierno, pues no sabe distinguir cuáles son los límites hasta donde puede llegar la disidencia interna manejada públicamente y tiene oxidados los mecanismos de toma de decisiones en su más alto nivel.

LOS COSTOS PARA QUIEN

El proceso de apoyos y críticas durante la semana y media que le costó al gobierno decidir las medidas cambiarias son un primer indicador de la repartición de los costos. Poca preocupación aparecía por los destinos de los dineros públicos, de las inversiones del Estado, por las consecuencias en los servicios masivos a la población. El punto de fricción fue el destino de la llamada "deuda privada externa". Cuando pareció que el gobierno daría trato preferencial indiscriminado a todos los compromisos del sector privado en el exterior, apoyo unánime de FEDECAMARAS y demás instituciones y voceros de nuestros preocupados empresarios. La posición del Dr. Díaz Bruzual en contra del trato preferencial indiscriminado fue objeto de toda clase de comentarios y presiones. Cuando el gobierno decide poner algunas condiciones y preferencias distintas, reuniones de urgencia de las cámaras respectivas, presiones de todo tipo, amenazas de desabastecimiento...

Una vez decididas las medidas asistimos a un espectáculo frecuente en el escenario de nuestra democracia. Mientras se están tomando las decisiones, se dice y hasta se presiona, pero con la seguridad de que si la decisión adoptada no es la que conviene a determinados grupos, éstos cuentan con mecanismos suficientes y eficientes para que esa decisión no los afecte en sus intereses concretos. Se acepta la ley o los decretos, pero por vía de excepción se deja sin efectos para los específicos casos de quienes forman ese círculo de privilegiados en el país. Se da tal multiplicación de excepciones que la ley o los decretos quedan reducidos en sus efectos reales a la mínima expresión. Es el mismo caso de las medidas contra la corrupción. Las hay muy fuertes, pero nunca se aplican a los corruptos con nombre y apellido, aunque conocidos sean.

Si hiciéramos un breve análisis de quiénes son los que pueden seguir comprando dólares a 4.30 bolívares, quiénes a 6 bolívares y quiénes están sometidos a las fluctuaciones del mercado y a la especulación, tendríamos una buena muestra de la repartición de costos que los sectores dominantes están imponiendo en el país.

En este momento la efectividad de las medidas para paliar la crisis fiscal es incierta. Quizá sea necesaria una nueva devaluación, quizá restringir más los controles en la salida de divisas... Lo que sí es cierto es que el peso de los costos sociales de tal situación está nuevamente sobre los hombros del pueblo. Los ingresos extraordinarios que necesitará el Estado para pagar su presupuesto de gastos los sacará de los mecanismos de devaluación y no del aumento del impuesto sobre la renta. La reducción del gasto público afectará los servicios que van a la mayoría. Los efectos inflacionarios y posibles dificultades de conseguir algunos productos harán sufrir a los bolsillos de la gente común. Los ingresos que se estabilizarán serán los de los asalariados, pues quienes se dedican a la especulación en cualquier nivel, los verán crecer. Los que menos se beneficiaron de los años de la falsa bonanza, son los que van a pagar la mayor parte de los costos de la crisis. A las inmediatas eso luce claro. En el futuro, sin embargo, las cosas pueden cambiar porque este pueblo tiene larga experiencia en luchar por la justicia y vivir en situación de crisis.